



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

ASUNTO	Apelación Sentencia anticipada - Verbal
DEMANDANTE	Sandra Prieto Salamanca
DEMANDADA	Sol Ángel Soto Vera
DECISIÓN	Confirma sentencia
PROCESO RDO.	05001-31-03-013-2018-00064-01

Medellín, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno

ANTECEDENTES

1. DEMANDA: Sandra Prieto Salamanca, por medio de apoderada judicial, presentó demanda de restitución patrimonial por enriquecimiento sin causa, en contra de Sol Ángel Soto Vera. Al respecto, formuló las siguientes pretensiones:

- Se declare que Sol Ángel Soto Vera se enriqueció injustamente y en detrimento del patrimonio de la demandante.
- Se condene a la demandada Sol Ángel Soto a pagar \$25'000.000^{oo} a la demandante, por concepto del saldo correspondiente al capital insoluto de la obligación hipotecaria que consta en el pagaré 01804082-4, más los intereses moratorios que se haya causado sobre esa suma, a partir del 28 de noviembre de 2007 y hasta la fecha en que se acredite el cumplimiento.
- Se condene a la demandada a pagar \$14'575.000^{oo} a la demandante, por concepto de los impuestos del bien inmueble objeto de la garantía real, los cuales fueron pagados por la demandante desde 2003 a 2016, más los intereses moratorios que se haya causado, desde la fecha en que fue pagado cada uno de esos impuestos y hasta la fecha en que se acredite el pago.
- Se condene a la demandada a pagar \$3'000.000^{oo} a la demandante, correspondientes a los costos de los honorarios de la abogada Amanda Lucía Hoicatá, los cuales fueron desembolsados por la demandante para

recibir asesoría en el proceso ejecutivo tramitado bajo el radicado 2007-1446, que cursó en el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá, el cual se instauró por la mora de la demandada en el pago de la obligación crediticia.

Como fundamento de lo pretendido, la apoderada judicial de la parte demandante expuso lo siguiente:

(a) El 04 de agosto de 1995, Sol Ángel Soto Vera, celebró un contrato de mutuo comercial con el Banco Central Hipotecario, por la suma de \$26'600.000^{oo}, el cual consta en el pagaré 01804082-4, que debía ser pagado en 180 cuotas mensuales.

En garantía de esa obligación, Sol Ángel Soto Vera, en condición de deudora, constituyó hipoteca a favor del Banco Central Hipotecario, sobre el inmueble que adquirió con el producto del crédito, según consta en la escritura pública 1877 de 25 de mayo de 1995.

(b) El Banco Central Hipotecario en Liquidación, endosó en propiedad el pagaré a favor de Central de Inversiones S.A.S. La garantía hipotecaria fue cedida el 24 de agosto de 2007.

(c) Ante el incumplimiento total de la obligación en mención, Central de Inversiones -en la condición de cesionaria y endosataria del Banco Central Hipotecario en Liquidación-, el 28 de noviembre de 2007 inició proceso ejecutivo en contra de Sol Ángel Soto Vera, el cual cursó en el Juzgado 17 Civil Municipal de Bogotá, bajo el radicado 2007-01446.

(d) El 28 de abril de 2011, Central de Inversiones S.A.S. cedió los derechos de crédito a Sandra Prieto Salamanca quien, en el trámite ejecutivo, en la condición de cesionaria, llevó a cabo la diligencia de secuestro del inmueble y asumió todos los costos que ello acarreó.

(e) La cesionaria Sandra Prieto Salamanca canceló \$14'575.000^{oo} por los impuestos que el inmueble adeudaba desde 2003 a 2006, con el fin de impedir que se iniciara el cobro coactivo.

(f) La demandada Sol Ángel Soto Vera, compareció al proceso ejecutivo el 12 de julio de 2016, esto es, 9 años después, y se opuso a las pretensiones de la demanda, mediante la interposición de las excepciones de prescripción y caducidad.

(g) El Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá, profirió sentencia el 09 de febrero de 2017, mediante la cual declaró probada la excepción de *"prescripción de la acción cambiaria"* y terminó el proceso.

(h) La falta de pago de la deuda contraída ocasionó el enriquecimiento injustificado de la obligada Sol Ángel Soto Vera y el correlativo empobrecimiento de la acreedora y cesionaria Sandra Prieto Salamanca, debido a que no ha podido recuperar el capital, ni tampoco percibir la renta de la operación.

(i) La demandada Sol Ángel Soto Vera incrementó injustamente su patrimonio, ya que, sin pagar el crédito hipotecario, quedó con el inmueble, cuyo avalúo catastral asciende a \$241'871.000^{oo} y el legal a \$368'806.500^{oo}; además, logró que el inmueble quedara a paz y salvo por concepto de impuestos en una cuantía de \$14'575.000^{oo}, sin haber sufragado un peso de esa suma, y también logró que los gastos del proceso ejecutivo hipotecario fueran cancelados por la parte demandante, sin asumir gasto alguno.

(j) El incremento injusto del patrimonio de la demandada acaeció con el empobrecimiento correlativo de Sandra Prieto Salamanca, quien disminuyó su patrimonio al perder todo lo invertido para celebrar la cesión de los derechos de crédito, lo cual representaba todos los ahorros de su vida, que provenían de la venta del único bien que poseía y que tenía destinados a la adquisición de una vivienda nueva.

(k) El dinero invertido por Sandra Prieto en la cesión, no solo implicó el valor de la compra, sino también el pago de los honorarios del abogado del cedente, los gastos para impulsar el proceso con los trámites pertinentes, los honorarios que la demandante tuvo que sufragar a la abogada en el proceso ejecutivo hipotecario que culminó con sentencia a favor de la demandada y el pago de impuestos del inmueble objeto de la medida de embargo, entre otros.

2. CONTESTACIÓN: La demandada Sol Ángel Soto Vera, fue emplazada y notificada por medio de curador *ad litem* (fol. 102), quien se opuso a las pretensiones de la demanda y como medios de defensa presentó las siguientes “excepciones”:

(i) “*Prescripción de la acción por enriquecimiento sin causa*”, bajo el argumento de que el término de prescripción de un año para ejercer la acción de enriquecimiento cambiario de que trata el artículo 882 del Código de Comercio, ya venció en este caso en concreto, ya que como lo expuso la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 26 de junio de 2008, el cómputo del término establecido para adelantar la acción de enriquecimiento cambiario no depende de que el fenómeno de la prescripción o la caducidad haya sido objeto de reconocimiento judicial, pues el ordenamiento jurídico no ha contemplado una exigencia semejante, sino que simplemente basta que cualquiera de ellos haya adquirido plena configuración, en orden a que el interesado tenga la posibilidad de acudir a ese remedio excepcional, como mecanismo tendiente a evitar que obtenga firmeza una situación patrimonial desequilibrada e injusta.

(ii) También solicitó que se reconociera de oficio cualquier excepción que apareciera probada en el proceso.

3. SENTENCIA ANTICIPADA: De conformidad con el numeral 2 del artículo 278 del Código General del Proceso, por no haber pruebas por practicar, el Juzgado 013 Civil del Circuito de Medellín, profirió sentencia anticipada el 01 de marzo de 2019, mediante la cual declaró probada la carencia de legitimación en la causa por activa y, en consecuencia, desestimó las pretensiones de la demanda, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y perfeccionadas, condenó en costas a la demandante y por concepto de agencias en derecho fijó \$5'700.000 a favor de la demandada Sol Ángel Soto Vera.

3.1. Respecto al enriquecimiento cambiario derivado del pagaré 01804082-4, la juez señaló que la demandante Sandra Prieto Salamanca, no acreditó ser la actual acreedora de esa obligación, cuya acción cambiaria se declaró prescrita. En efecto, la funcionaria judicial expuso que la demandante no acreditó que efectivamente en el proceso ejecutivo radicado 2007-01446 que cursó en el

Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá, se haya reconocido a la Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidación, como cesionaria y endosataria de CISA S.A. Al respecto, la juez precisó que en el ordinal tercero del auto inadmisorio de la demanda se requirió a la demandante para que allegara las copias simples y auténticas de dicho trámite ejecutivo, por lo que negó la solicitud de prueba trasladada, la cual fue desistida expresamente por la parte demandante.

Así, la juez advirtió que al no acreditarse que la demandante tiene la condición de tenedora del documento crediticio, entregado como pago de una obligación preexistente, cuya acción ha caducado o prescrito, no se cumple con la legitimación para interponer la pretensión de que trata el artículo 882 del Código de Comercio.

3.2. De otro lado, en cuanto a la acción de enriquecimiento sin causa de que trata el artículo 831 del Código de Comercio y que en este evento comprende las pretensiones relativas al pago de los impuestos del inmueble y los honorarios de la abogada, la juez consideró que como se trata de una acción subsidiaria, y la demandante en este caso expresó que pagó deudas sin conocimiento de la deudora, resulta aplicable el artículo 1631 del Código Civil, que dispone que quien paga sin conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que este le reembolse lo pagado, lo cual significa que la demandante tiene otra acción para recuperar de la deudora lo efectivamente pagado, lo que, por contera, implica que la demandante también carece de legitimación en la causa para ejercer la acción *in rem verso*, por esos conceptos.

4. APELACIÓN: Inconforme con lo resuelto, LA PARTE DEMANDANTE formuló el recurso de apelación.

4.1. La recurrente expuso que la juez de primera instancia no tuvo razón al decidir de esa manera, debido a que en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado en el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá bajo el radicado 2007-01446 en contra de Sol Ángel Soto Vera, quedó registro de la audiencia de instrucción y juzgamiento practicada el 09 de febrero de 2017, en la que consta que la aquí demandante Sandra Prieto ostenta la condición de cesionaria. En ese proceso, la juez fue literal al individualizar las partes del proceso y

determinar la cadena de cesiones al establecer que la parte demandante era Sandra Prieto Salamanca, cesionaria de la Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidación, quien a su vez fue cesionaria de Central de Inversiones S.A.

La demandante señala que ese fallo en audiencia constituye una prueba documental idónea que no fue tachada como falsa, y que de acuerdo con los artículos 243 y 244 del Código General del Proceso, se presume auténtica, por lo que es inadmisibile que el juzgado no hubiera escuchado la grabación de la citada audiencia y además advierta que en el expediente no reposa medio probatorio alguno de que ella ostenta la condición de acreedora que la legitima para interponer esta acción. Por el contrario, afirmó que tal situación quedó acreditada, así como que la demandante no recibió el pago de la acreencia ante la conducta de la demandada que alegó prescripción -que fue declarada por el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá-, lo cual generó un grave perjuicio al patrimonio de la demandante al perder dichos recursos económicos, porque los mismos se desplazaron del patrimonio de la demandante e ingresaron al de la demandada.

Asimismo, señaló que no es cierto que el juzgado haya inadmitido la demanda para que la parte demandante acreditara la condición de acreedora.

4.2. La recurrente también expuso que no es cierto que no se haya acreditado los elementos sustanciales de la pretensión de enriquecimiento sin justa causa, ya que sí existió un desplazamiento injusto del patrimonio de Sandra Prieto al de la demandada Sol Ángel Soto Vera y, además, señaló que dicha acción es la única vía procedente que tiene para demandar en atención a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio, ya que la ejecutiva fue declarada prescrita. Al respecto, la apelante precisó que no es aceptable el argumento de que no es procedente la acción respecto a los dineros relativos al pago de impuestos y demás gastos, pues estos sí constituyeron una ganancia para la demandada y una pérdida para la demandante, porque tampoco fueron reintegrados.

4.3. Finalmente, presentó inconformidad con el monto fijado por concepto de agencias en derecho. Sobre este punto, la recurrente adujo que, en este

evento, de no prosperar el recurso de apelación, se deberá establecer un monto inferior por ese concepto, en atención a la naturaleza, calidad y duración de la gestión de la parte demandada que en este caso está representada por curador *ad litem* y también debido a que ella como demandante no solo ha perdido parte del patrimonio, sino que además ha sido condenada a pagar unos rubros adicionales, sin tener en cuenta ella es una madre cabeza de familia, que apenas cuenta con recursos para su propia subsistencia.

5. ALEGACIONES EN ESTA INSTANCIA.

5.1. La apoderada judicial de la parte demandante, reiteró los argumentos expuestos en los reparos concretos presentados ante la primera instancia e insistió en que una debida valoración probatoria permite concluir que en efecto la demandante ostenta la condición de cesionaria y que los requisitos para que prospere la acción de enriquecimiento sin justa causa se encuentran reunidos.

5.2. La parte no recurrente guardó silencio.

CONSIDERACIONES

1. PRECISIÓN PRELIMINAR: Previo a delimitar el problema jurídico suscitado en el recurso interpuesto, el Tribunal considera pertinente precisar, en cuanto al reparo esgrimido por la parte demandante en torno al monto de la condena impuesta en primera instancia por concepto de agencias en derecho, emolumento que corresponde pagar a la parte vencida en el proceso que no se encuentre resguardada bajo el amparo de pobreza, que la inconformidad dirigida a controvertir el monto fijado por tal concepto, no es un asunto susceptible de debate en esta oportunidad, porque de conformidad con el numeral 5 del artículo 366 del Código General del Proceso, solo puede ser reclamado mediante los recursos de reposición y apelación del auto que apruebe la liquidación de costas hecha por el juzgado que haya conocido del proceso en primera instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO. En este orden, en atención al recurso de alzada interpuesto, a la Sala le corresponde definir, si como la parte demandante pretende, la decisión de primera instancia debe ser revocada, por cuanto en

este asunto, conforme se desprende de las pruebas obrantes en el expediente, sí se acreditó que la demandante ostentara la condición de acreedora actual de la obligación perseguida y, además, se reúnen los requisitos sustanciales para que la acción de enriquecimiento sin causa prospere.

3. MARCO NORMATIVO Y DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA DECISIÓN Y CASO CONCRETO.

3.1. Sobre la legitimación en la causa, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, en sentencia SC3631 de 25 de agosto de 2021, explicó:

“La legitimación en la causa, elemento material para la sentencia estimatoria –o, lo que es lo mismo, una de las condiciones sustanciales para el éxito de las pretensiones–, denota la correspondencia entre los extremos activo y pasivo del derecho sustancial reclamado, con los extremos activo y pasivo de la relación procesal mediante la cual se pretende su instrumentalización. La *legitimatío ad causam* se estructurará cuando coincidan la titularidad procesal afirmada en la demanda y la sustancial que otorgan las normas jurídicas de ese linaje.

No basta, pues, con la auto-atribución o asignación del derecho por parte del demandante en su escrito inicial, sino que es necesaria la efectiva titularidad del derecho material discutido en el juicio; por ello la legitimación se ubica en los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria, y no en los presupuestos procesales de la acción, que son condiciones formales para el válido desarrollo de la relación instrumental¹.

3.2. En torno a la legitimación en la causa en la pretensión del enriquecimiento cambiario, la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- tiene dicho que,

¹ Esos presupuestos constituyen los requisitos adjetivos indispensable para que pueda concretarse *válidamente* la acción. También para que nazca, se trabe, se desarrolle y termine *válidamente* la relación jurídica procesal. Se integra por jurisdicción, competencia, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer, demanda en forma, no caducidad de la acción y solicitud de conciliación extrajudicial en derecho cuando está exigida. Su importancia radica no solo en la vigencia del debido proceso, sino en que garantiza la aptitud formal del instrumento procesal para proferir el fallo de fondo. Una vez verificada la validez formal del instrumento procesal, procede examinar el sentido de la decisión, esto es, el acogimiento o no de la pretensión y la excepción, aspecto en el cual el escrutinio versa sobre el derecho material debatido, integrado justamente por los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria, esto es, interés para obrar y legitimación en la causa.

"(...) en cuanto hace a los títulos valores, el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio *"privó a la caducidad y a la prescripción de tales instrumentos 'del carácter de justas causas para consolidar desplazamientos patrimoniales, no obstante que en su producción haya podido jugar papel de alguna importancia la culpa o la voluntad de la víctima' (CCXXV, págs. 770 y 771) y, con tal miramiento, **le concedió al acreedor** la acción de enriquecimiento sin causa que, por tal razón, goza de una característica especial frente al régimen común que le es propio a dicha fuente de las obligaciones, por lo que, tratándose de esa particular hipótesis, no pueden los Jueces, como erradamente lo hizo el ad quem en el caso in examine, considerar que el acreedor demandante tenía 'otra vía...para reclamar su derecho' (fl. 41, cdno. 2), específicamente la acción causal, pues de esta manera se pasa por alto, de una parte, que la obligación originaria se extinguió por efecto de la prescripción (inc. 3º art. 882 C. de Co.), lo que impide acudir al negocio subyacente, y de la otra, que en dicha materia, como se acotó, existe un régimen especialísimo, consagrado en la misma disposición, que obliga a separarse -en el punto- de la preceptiva general (art. 831 C. de Co.)"* (Cas. Civ., sentencia del 30 de julio de 2001, expediente No. 6150; se subraya).

En cambio, respecto a la legitimación en la causa en la acción de enriquecimiento sin causa común, esa Corporación ha expuesto que:

*"4º Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos"*².

4. En el caso concreto, la Sala advierte de entrada, que la decisión de primera instancia debe ser confirmada, en tanto que la parte demandante carece de legitimación en la causa en el presente asunto, como bien la juez *a quo* concluyó, pues efectivamente aquella no acreditó ninguna de las condiciones requeridas para ello, conforme se explica a continuación.

4.1. En la acción de enriquecimiento sin causa cambiaria de que trata el último inciso del artículo 882 del Código de Comercio³, está legitimado para demandar

² CSJ, sentencia de 19 de diciembre de 2012. Exp. 54001-3103-006-1999-00280-01

³ "Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a consecuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en un año".

*"el tenedor de un documento crediticio, entregado como pago de una obligación preexistente, cuando es privado de los mecanismos procesales inherentes a los instrumentos negociables y de las acciones propias de la relación causal, al estar fenecida por caducidad o prescripción"*⁴. En síntesis, quien demanda por esta vía, debe acreditar que es el actual acreedor de esa obligación, ya que aquel está legitimado no solo para cobrar el importe de los títulos, sino para demandar el pago del detrimento que se haya causado por no haberse cobrado oportunamente. No obstante, en el caso concreto, la demandante Sandra Prieto Salamanca no acreditó ser la acreedora del pagaré 01804082-4, respecto del cual, el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá, en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado bajo el radicado 2007-01446, declaró la prescripción de la acción cambiaria, conforme fue afirmado en la demanda.

En efecto, la demandante Sandra Prieto Salamanca carece de legitimación para reclamar el enriquecimiento cambiario, ya que, si bien alega que actualmente es la cesionaria del crédito objeto de recaudo en la ejecución real que se tramitó en el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá, no hay prueba que demuestre que fue reconocida como tal en dicha causa judicial. La recurrente insiste en que en el proceso ejecutivo hipotecario tramitado bajo el radicado 2007-01446, consta la cadena de cesiones, en tanto que allí se estableció que la parte demandante era Sandra Prieto Salamanca, cesionaria de la Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidación, quien a su vez fue cesionaria de Central de Inversiones S.A., pero ello no fue acreditado en este proceso.

Adicionalmente, en el recurso de alzada, la apelante advierte que la juez *a quo* no escuchó la audiencia de instrucción y juzgamiento practicada el 09 de febrero de 2017 en el proceso ya mencionado, en la que supuestamente se individualiza a la aquí demandante como cesionaria, pero lo cierto es que el audio aportado con la demanda, no da cuenta de ninguna audiencia, pues solo registra un video, sin audio, con duración de 32 segundos, en el que apenas se prepara la práctica de una audiencia.

Con la demanda, la parte demandante aportó el *"contrato de cesión de derechos de crédito"* que data de 28 de abril de 2011 (fs. 39 a 42, c.1), en el

⁴ CSJ, sentencia SC2343 de 26 de junio de 2018.

que figura como cedente la Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidación, y como cesionaria Sandra Prieto Salamanca, el cual tiene por objeto los derechos de crédito de la obligación 450018018040824 que adeuda Sol Ángel Soto Vera. No obstante, ese documento, por sí solo, no acredita que la aquí demandante sea la actual acreedora de esa obligación, en tanto que tampoco se acreditó que Central de Inversiones S.A. le haya cedido al crédito de la referencia a la Compañía de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidación y que ello haya sido aceptado en el proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá.

4.2. Por lo expuesto, en lo que tiene que ver con las pretensiones dirigidas a que se declare el enriquecimiento cambiario respecto al saldo insoluto contenido en el pagaré 01804082-4, más los intereses moratorios que sobre ese capital se haya causado, la decisión de primera instancia será confirmada, en tanto la demandante no acreditó que ostenta la condición de acreedora del pagaré, situación que impide estudiar los demás elementos configurativos del enriquecimiento cambiario de que trata el inciso final del artículo 882 del Código de Comercio.

4.3. De otro lado, la apelante señaló que no es aceptable que la funcionaria judicial de primer grado haya considerado que la acción de enriquecimiento injustificado no es procedente en este evento respecto a los dineros relativos al pago de impuestos y demás gastos, pues la recurrente advierte que estos sí constituyeron una ganancia para la demandada y una pérdida para ella, porque tampoco fueron reintegrados.

Sobre el particular, la Sala coincide con lo expuesto por la juez *a quo*, al advertir que las pretensiones dirigidas a que se declare el enriquecimiento sin causa de la demandada, por los pagos que la demandante hizo por concepto de impuestos prediales y honorarios de abogado en el proceso ejecutivo -gastos que considera le correspondía asumir a la aquí demandada-, han de estudiarse por la senda común de la acción de enriquecimiento sin justa causa de que trata el artículo 831 del Código de Comercio⁵, lo cual exige, entre otros presupuestos, que "(...) el

⁵ “Nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro”.

enriquecimiento no haya tenido ningún otro medio para obtener satisfacción, puesto que la acción de in rem verso tiene un carácter esencialmente subsidiario (G.J. Tomo XLIV, pág. 474, XLV, pág. 29 y Sent.053 de 22 de febrero de 1991). En el mismo sentido se pronunció la Corte en sentencia 124 de 10 de diciembre de 1999' (Sent. Cas. Civ. de 28 de agosto de 2001, Exp. No. 6673)”, situación que la misma Corte Suprema de Justicia ha precisado, se torna en presupuesto de la legitimación en la causa para que se configure dicha pretensión.

En tal orden, el Tribunal encuentra que la demandante también carece de legitimación en la causa por activa para pretender la declaración de enriquecimiento sin justa causa por parte de Sol Ángel Soto, justificada en el pago que supuestamente ella hizo por concepto de impuestos prediales y honorarios de la abogada, en tanto no acreditó haber agotado las demás acciones con las que cuenta para recuperar el dinero que aquí reclama, más aún porque tales deudas no fueron objeto del proceso ejecutivo rad. 2007-01146 tramitado en el Juzgado 017 Civil Municipal de Bogotá. En efecto, como bien señaló la juzgadora de primer grado, la conducta afirmada por la demandante, consistente en haber pagado deudas sin conocimiento de la deudora, se enmarca en el supuesto del artículo 1631 del Código Civil, que dispone que *“El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado (...)”*, lo cual significa que la demandante aún cuenta con otras vías para reclamar el dinero que por esta institución persigue, lo que implica que aún no está legitimada sustancialmente para demandar el enriquecimiento sin justa causa en contra de Sol Ángel Soto Vera. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha sido reiterativa en señalar que *“Para que sea legitimada en la causa la acción de in rem verso, se requiere que el demandante a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acción originada por un contrato, un cuasi-contrato, un delito, un cuasi-delito, o de las que brotan de los derechos absolutos”*⁶.

5. Por estas razones, sin necesidad de ahondar en aspectos adicionales, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia será confirmada. Sin condena en costas en esta instancia, por cuanto no se causaron.

⁶ CSJ, sentencia de 19 de diciembre de 2012. Exp. 54001-3103-006-1999-00280-01

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia anticipada proferida el 01 de marzo de 2019 por el Juzgado 013 Civil del Circuito de Medellín.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

NOFÍQUESE Y CÚMPLASE

Discutida y aprobada en sala virtual por los magistrados,



MARTHA CECILIA LEMA VILLADA



RICARDO LEÓN CARVAJAL MARTÍNEZ



LUIS ENRIQUE GIL MARÍN